



As Ordinario Resp. Contracual M.P. EDGAR ROBLES RAMÍREZ RAD. 2012-0022-01

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

CIVIL FAMILIA LABORAL

Magistrado Ponente: Dr. EDGAR ROBLES RAMÍREZ

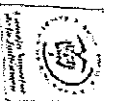
Proceso : RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL CIVIL
Radicación : 41001-31-03-005-2012-00022-01 ✓
Demandante : ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. E.S.P.
Demandados : INDRA COLOMBIA LTDA. ✓
APLIUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA

Neiva, veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Será del caso decidir el recurso de apelación propuesto por las partes contendientes, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, dentro del proceso propuesto por la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. E.S.P. contra las sociedades INDRA COLOMBIA LTDA. Y APLIUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA. sino fuera porque se observa que este Tribunal Superior, en su Sala Civil Familia Laboral, no es la Jurisdicción a la cual le corresponde decidir el asunto.

El escrito genitor fue repartido a los jueces civiles del circuito de esta ciudad, y su petitum se contrae a declarar "que las sociedades demandadas INDRA COLOMBIA LTDA. Y APLIUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA. incumplieron los contratos de suministro de servicios No. -040 del 2007 y 050 de 2007 suscritos con la Electrificadora del Huila S. A. E.S.P. y en consecuencia son solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados..."

Ahora bien, prudente es establecer que el citado escrito incoativo fue admitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, el día veintitrés



As. Ordinario Resp. Contractual M.P. EDGAR ROBLES RAMÍREZ RAD. 2012-022-01

(23) de octubre de 2012², fecha en la cual se encontraba vigente la L 1437 de 2011³, por lo tanto, el análisis jurisprudencial se hará con la referida norma, valga decir primando el criterio orgánico en la definición de competencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Este tribunal en pretérita oportunidad ha sostenido que en asuntos similares al objeto de la litis, la Jurisdicción Competente para conocer es la Contenciosa Administrativa; así en interlocutorio N° 006 DEL 23 DE ENERO DEL 2014 sostuvo:

"Tratándose de asuntos de responsabilidad civil extracontractual y en vigencia de la citada ley, el magistrado ALBERTO MEDINA TOVAR considera que cuando una de las partes implicadas en el litigio es una empresa de servicios públicos, el Consejo Superior de la Judicatura ha dicho que la competencia se radica en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, así, en la providencia del 11 de diciembre de 2012, M.P. Angelino Lizcano Rivera⁴ entendió que "el propósito del legislador al expedir la normativa en cita, no fue otro que el de solucionar la polémica surgida a propósito de la jurisdicción competente para conocer de las controversias judiciales en las cuales se hallan involucradas las Empresas de Servicios Públicos".

Pues bien, en tratándose de asuntos de responsabilidad contractual y en vigencia de la citada ley, cuando una de las partes implicadas en el litigio es una empresa de servicios públicos (en adelante SPD), el Consejo Superior de la Judicatura ha dicho que la competencia se radica en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa, así, en la providencia del 12 de diciembre de 2012, M.P. Angelino Lizcano Rivera⁵ entendió que

² Fl. 315- 316 del Dossier 1A

³ Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inician, así como a las demandas y procesos que se instauran con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán reglándose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

⁴ Radicación No. 110010102000201202419 00

⁵ Radicación No. 110010102000201202419 00



As Ordinario Resp. Contratación M.P. EDGAR ROBLES RAMÍREZ RAD. 2012-022-01

"el propósito del legislador al expedir la normativa en cita, no fue otro que el de solucionar la polémica surgida a propósito de la jurisdicción competente para conocer de las controversias judiciales en las cuales se hallan involucradas las Empresas de Servicios Públicos".

En dicha oportunidad, la mencionada Corporación acogió el criterio expuesto por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, en auto del 8 de febrero de 2007, expediente No. 30.903, y transcribió el siguiente aparte:

"... del modo en que se estableciera desde la exposición de motivos del proyecto de ley, debido a la falta de uniformidad de criterios interpretativos entre una y otra corporación, la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad que el sistema jurídico colombiano, de conformidad con nuestra Constitución, debe garantizar, se ha visto frecuentemente amenazado. Esta situación se ha hecho manifiesta en la diferencia de criterios adoptados por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, cuando se trata de determinar la competencia, por ejemplo, para el conocimiento de demandas de responsabilidad extracontractual, o **inclusive, contractual, de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.** (Negrillas fuera de texto)

Ahora, según la historia legislativa, es indiscutible que el Congreso dispuso entregarle a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el juzgamiento de las entidades estatales, incluidas las que prestan SPD, pues, no en vano los procesos contractuales y extracontractuales fueron los que sirvieron de paradigma, durante los 4 debates, para expresar que existía una diferencia profunda en las altas Cortes, con respecto al tema de la jurisdicción, y que era necesario reformar el art. 82 del CCA para resolver el problema.

Este último debate resultó ser especialmente esclarecedor del parágrafo del artículo segundo, pues, una vez más, se dejó establecido que esta jurisdicción era quien debía volver a conocer de las controversias donde



As. Ordinario Resp. Contraguajal M.P. EDGAR ROBLES RAMÍREZ NAD, 2012-02-20

fuera parte el Estado, incluidas las empresas de SPD -motivo determinante del proyecto de ley-, salvo en las materias que desde la exposición de motivos se había indicado: el tema laboral y los ejecutivos de factoring de los SPD. Se dijo, pues, en esta ocasión:

"De este modo, los suscritos ponentes sugerimos la aprobación de tres artículos que se presentan en el texto propuesto para segundo debate, a través de los cuales se pretende cambiar el contenido material de asignación de competencias a la jurisdicción contencioso administrativa, por el criterio orgánico, manteniendo claro está, la vigencia, en materia de competencia, de la Ley 712 de 2001 acerca de conflictos laborales; del artículo 18 de la Ley 689 de 2001 acerca del cobro de deudas derivadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios; y del artículo 33 de la Ley 142 de 1994, referido a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando las empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios ejerzan ciertas facultades especiales". (Negritas Negro de texto)

Finalmente, y dado que se presentaron algunas diferencias entre los textos aprobados en las plenarios de Senado y Cámara, se nombró una Comisión de Conciliación, la cual, en forma escueta y contundente, dijo que:

"Luego de un análisis detallado de los textos, cuya aprobación por los respectivos plenarios presenta una diferencia en el artículo 1º, hemos acordado acoger el texto aprobado por la Plenario del honorable Senado de la República, en el entendido de que dicho texto se adecua mejor al objeto y espíritu del proyecto de ley.

Con la anterior decisión el texto conciliado, finalmente sancionado y publicado en el Diario Oficial, es el siguiente:



As Ordinario Resp. Contracual M.P. EDGAR ROBLES RAMÍREZ RAD. 2012-022-01

9

Artículo 1º. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedaría así:

"Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.

Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional".

Artículo 2º. Derogase el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias.



ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA
COMISIONADO GENERAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 1 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001.”

Luego de hacer este recorrido, en el contexto del debate legislativo, por la Sala es claro que el propósito del legislador fue darle solución a la polémica surgida entre las altas Cortes, a propósito de la jurisdicción competente para conocer de algunas controversias, así como para dilucidar, al interior del Consejo de Estado, sus propias dificultades para resolver con claridad los problemas de las Empresas de SPD, que sirven de base a la exposición de motivos del proyecto de ley, como también, todas las ponencias en cada uno de los debates.

Ante este panorama controversial, el legislador adoptó una solución, clara y agresiva. Asignó, de manera fuerte e intensa, a la jurisdicción de la contencioso administrativo, la competencia para juzgar las controversias donde son parte las “entidades públicas”, sin importar la función que desempeñe cada una de ellas, pues se pasó de considerar el “criterio material o funcional”, como factor de distribución de competencias, al “criterio orgánico”, donde lo determinante es la pertenencia a la estructura del Estado.

Esta idea aplica para cualquier tipo de proceso, tratándose de empresas de SPD, entre los cuales se incluyen, a título de ejemplo, las controversias contractuales, las extracontractuales, las de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, no se incluyen las relacionadas con los ejecutivos de facturas del servicio, las cuales se continuarán tramitando ante la justicia ordinaria, en los términos previstos en el artículo 130 de la ley 142 de 1994.



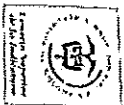
- *Journal of the American Medical Association*, 1997

ISO

tribunales administrativos en
administrativos conocerán en

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus

Art. 42. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS. Adicionase el Título 14 del Libro 3o. del Código Contencioso Administrativo con un Capítulo III del siguiente tenor:



As Ordinario Resp. Contracual M.P. EDGAR ROBLES RAMIREZ RAD. 2012-022-01

"Artículo 134B. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los Jueces Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

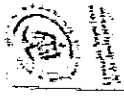
5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

Dado que la nueva ley extiende la competencia a toda clase de entidades, sin consideración a la función que ejercen ni al objeto de los contratos, entonces la segunda parte del numeral 5, resaltado en negro, quedó derogada por la nueva ley, porque no pueden subsistir, al menos en los aspectos a que se refiere la ley, criterios materiales y criterios orgánicos sin excluirse.

ii) Debe conocer de las controversias y litigios de responsabilidad extracontractual, en los que sea parte una entidad pública, sin importar el tipo de órgano, ni la función que ejerza, basta con que se trate de una entidad pública, con la excepción del numeral siguiente.

iii) Las materias a que se refieren los numerales anteriores, las juzga esta jurisdicción, inclusive, tratándose de sociedades donde el Estado posea un capital superior al 50%. Si el capital público es igual o inferior a este porcentaje, la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria.

iv) En materia laboral, esta jurisdicción sigue conociendo de los asuntos que tenía asignados, excepto los previstos en la ley 712 de 2001, la cual continúa vigente, en los términos del párrafo del art. 2 de la ley 1.107 de 2006.



v) También debe conocer de las controversias y litigios de las personas privadas "... que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado" -art. 1, ley 1.107 de 2006-, incluidas las contrataciones de las empresas privadas de SPD, donde se pacten y/o ejerciten los poderes exorbitantes -art. 31 ley 142, modificado por la ley 689 de 2001-, y las materias a que se refiere el art. 33 de la misma ley.

vi) Esta jurisdicción no conoce, sin embargo, de los procesos de ejecución que reúnan las características descritas, salvo los que están asignados por normas especiales-ejecutivos contractuales (art. 75, ley 80) y de sentencias dictadas por esta jurisdicción (art. 132.7 del CCA)-, que prevalecen sobre las disposiciones generales.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado en lo atinente a la competencia en segunda instancia de los procesos donde se encuentra demandada una empresa de servicios públicos, así en sentencia calendarada el día 28 de Febrero de 2013 en el radicado N° 50001-23-31-000-1997-06033-01(24992),, sostuvo que:

"En lo relativo a la responsabilidad extracontractual de una Empresa de Servicios Públicos, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 del 2006, que atribuye a ésta jurisdicción la competencia para juzgar las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas, incluidas las sociedades de economía mixta con participación pública superior al 50%. En este sentido, cabe recordar que ésta Sala ha sido reiterativa al señalar que a partir de la expedición de la aludida Ley 1107 de 2006, la cláusula de competencia contenida en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo fue modificada de manera tal que con ella se introdujo un criterio orgánico por el cual la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se determina por la naturaleza pública de la entidad demandada, y no por el carácter de función administrativa de la actuación objeto del asunto, o el



As Ordinario Resp. Contractual M.P. EDGAR ROBLES RAMÍREZ RAD. 2012-022-01

régimen jurídico aplicable, o la índole de controversia que plantea el litigio (contractual, extracontractual o de nulidad y restablecimiento del derecho). (...) la Electrificadora del Mérida S.A. ESP es una empresa de servicios públicos constituida como sociedad por acciones con una participación pública superior al 50%, se concluye que se trata de una ESP mixta en los términos del artículo 14, numeral 6 de la Ley 142 de 1994 y por ende una entidad pública de las enlistadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, respecto de cuyos procesos conoce la jurisdicción contencioso administrativa en razón al criterio orgánico (...) igualmente, se profiere esta decisión en virtud de lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo que otorga competencia a esta corporación para resolver las apelaciones interpuestas por las partes contra las sentencias de primera instancia proferidas por los tribunales administrativos, y en atención a que la cuantía de las pretensiones de la demanda supera el monto establecido por el Decreto 597 de 1988 para que se trate de un proceso de doble instancia. Así las cosas, la Sala encuentra injustificada la decisión del fallador de primera instancia de declararse inhibido para fallar el asunto sub júdice por falta de competencia".

En este sentido a tono con los apartados 14.5, 14.6 y 14.7 del artículo 14 de la Ley 142, proferida en el año de 1994, las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden ser de tres clases: oficiales, mixtas o privadas, dependiendo de la composición de su capital social, así:

"14.5. EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIALES. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.

"14.6. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades



descentralizadas de aquella o estas tienen aportes iguales o superiores al 50%.

"14.7. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares."

Precisar la naturaleza de estas empresas, a efectos de determinar, entre otros asuntos, la naturaleza del contrato y la jurisdicción competente para conocer de sus conflictos.

Pues bien, la ELECTRICIDAD DEL HUILA S. A. E.S.P., es una Empresa de Servicios Públicos con participación pública mayoritaria, así lo constató el suscrito Magistrado al consultar la página web oficial de la ELECTRICIDAD DEL HUILA S.A. E.S.P. en donde se detalla que es una empresa cuyo capital accionario pertenece en un 83.05% a la Nación - Ministerio de Minas y el porcentaje restante es del Departamento del Huila, Infihuala, y diversos Municipios de este mismo departamento, luego, en términos de lo expuesto y con fundamento en el criterio orgánico, tiene el carácter de entidad estatal, en tanto es una empresa de servicios públicos mixta, de acuerdo con los artículos 14.5 y 14.6 de la Ley 142 de 1994; es más, según los dictados del apartado 14.6 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, dicha compañía encaja en la definición de empresa de servicios públicos domiciliarios Mixta; en esa medida es claro que los contratos que celebra son estatales y, por tanto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se instituye el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Jurisdicción no es competente para conocer del proceso de la referencia.



As Ordinario Resp. Contractual M.P. EDGAR ROBLES RAMÍREZ R.A.D. 2012-022-01

Así las cosas, atendiendo el criterio que ha tenido este tribunal, en pronunciamientos anteriores sobre el tema, con ponencia del MAGISTRADO ALBERTO MEDINA TOVAR, dispondrá la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Huila.

Sin más consideraciones, este Despacho Judicial administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

RESUELVE:

DECLARAR que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil, Familia, Laboral, no es la Jurisdicción competente para conocer de este proceso. En consecuencia se ordena su remisión a la Jurisdicción competente, para el caso es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Huila.

NOTIFÍQUESE

Edgar Robles Ramírez
EDGAR ROBLES RAMÍREZ

Magistrado.